



DENUNCIAN AFECTACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y MULTAS MILLONARIAS DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN RONDA UNO

- El análisis de la organización civil PODER evidenció que empresas como Shell, BP y Chevron están vinculadas a casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y daños medioambientales.
- El reporte hace énfasis en la necesidad de que México cuente con un marco regulatorio e instituciones fuertes en materia de transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda vigilar el desempeño de las empresas en el aprovechamiento del petróleo nacional.

México, D.F., a 28 de septiembre de 2015- La organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) presentó un análisis detallado de cinco empresas participantes en la segunda licitación de la Ronda 1, evidenciando que éstas han incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos y afectaciones al medioambiente.

Omar Escamilla, investigador de PODER, detalló que las empresas analizadas fueron las multinacionales Shell, BP y Chevron, así como las mexicanas Grupo Carso y Grupo Bal, empresas que se encuentran dentro del ranking de las 2,000 más grandes del mundo.

Asimismo, el informe identificó que estas empresas tienen como accionistas a gobiernos como China, Qatar, Kuwait o Corea del Sur, mediante la figura de “fondos soberanos de inversión”, es decir, recursos públicos que se invierten en los mercados financieros.

Incidencia en la industria energética de México

El informe de PODER hace énfasis en la necesidad de que México cuente con un marco regulatorio e instituciones fuertes en materia de transparencia y rendición de cuentas empresarial que regule adecuadamente las operaciones de éstas y que dote a comunidades y ciudadanía de mecanismos para defender sus derechos y vigilar el desempeño de las empresas en el aprovechamiento del petróleo nacional. Estas empresas tienen gran capacidad de incidencia en la industria energética en el país.

Ejemplo de lo anterior es el caso de Chevron. La investigación arrojó que ocho años antes de que en México fuera permitida la participación de capitales privados en actividades de producción y exploración de hidrocarburos, esta empresa contaba ya con una unidad de exploración y producción en el país. Además, Chevron ha reconocido que participó en el proceso de cabildeo para la apertura del sector energético a capitales privados.



Por su parte, Shell ha sido acusada por PEMEX por la compra de petróleo de tomas clandestinas en la cuenca de Burgos, y BP, en una inversión conjunta con PEMEX, planea la construcción de un gasoducto en el Istmo de Tehuantepec que conectará el Atlántico con el Pacífico.

Asimismo, Grupo Carso y Grupo Bal, a través de su participación en consorcios de empresas extranjeras, fungen como punto de entrada de capitales extranjeros al mercado energético mexicano, y a partir de la reforma energética de 2013 han creado empresas especializadas para competir en el mercado.

Pero, a pesar de estos antecedentes, el gobierno mexicano ha flexibilizado los requisitos contenidos en las bases de la segunda licitación de la Ronda 1, puesto que se redujeron en comparación con las exigencias de la primera licitación, desperdiciando una oportunidad histórica para crear e implementar mecanismos de rendición de cuentas empresarial.

Daños al medioambiente

En conferencia de prensa el investigador de PODER advirtió que Shell, Chevron y BP han causado los peores desastres ambientales de la historia y acumulan la suma de 20,332 millones de dólares por concepto de multas.

Cabe recordar que en 2012 BP se declaró culpable de 11 cargos, entre ellos el de negligencia, por el desastre de la plataforma Deepwater Horizon que realizaba trabajos de perforación en el Golfo de México, lo que causó la muerte de 11 trabajadores. Por este accidente, el pozo Macondo estuvo incendiando 87 días y se derramaron 4 millones de barriles de petróleo, generando el peor derrame de crudo en el Golfo de México.

En tanto, en 2011 tribunales de Ecuador encontraron culpable a Chevron por contaminar más de 400 mil hectáreas y por haber vertido aproximadamente 72 mil millones de litros de agua sucia en el medioambiente.

Por su parte, en 2005 la Unidad Minera Sabinas del Grupo Industrias Peñoles (de Grupo Bal) derramó mil metros cúbicos de substancias con metales pesados y químicos en el arroyo El Canutillo, en el municipio del Sombrerete, Zacatecas.

Además, el análisis también arroja que estas empresas están vinculadas a casos de corrupción, graves violaciones de derechos humanos, paramilitarismo y otros daños sociales y medioambientales.



Represión

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos por parte de estas empresas, PODER detectó que en la década de los noventa se formó el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) que se oponía a las operaciones de Shell en Nigeria. En 1995 el ejército ejecutó a varios líderes del MOSOP, entre ellos Ken Saro-Wiwa, que se habían manifestado contra las operaciones de dicha empresa; esto provocó que se presentaran dos demandas en Estados Unidos en las que se acusaba a Shell de participar en las ejecuciones de activistas.

En mayo de 2015, el líder sindical de Colombia, Gilberto Torres, demandó a BP por su presunta participación en el secuestro y tortura de trabajadores que se manifestaron por mejores condiciones laborales. De acuerdo a las declaraciones de Torres, BP estuvo pagando 100 millones de pesos colombianos mensuales a grupos paramilitares a cambio de protección contra las comunidades y los trabajadores opositores a sus actividades durante el tiempo que operó en aquel país.

En Nigeria se señala a Chevron por facilitar en 1998 instalaciones al ejército para reprimir una manifestación pacífica en la plataforma Parabe, donde dos manifestantes murieron y 30 fueron heridos por arma de fuego.

Las ventas que reportan estas empresas equivalen al 80% del Producto Interno Bruto de México y sus reservas de barriles de petróleo son superiores a las que tiene el país. Su capacidad de incidencia es tal que pueden destinar cantidades millonarias para la formulación de políticas públicas en Estados Unidos o posicionar a directivos en cargos de la Casa Blanca, por señalar algunos casos.

Para mayor información puede consultar el dossier de prensa y la investigación de las empresas en la página de PODER: www.projectpoder.org. PODER es una organización regional sin fines de lucro que impulsa la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil.

Contacto de prensa:

Gerardo Soriano
Cel. 55 3472 4329
Tel. 4444 0555 ext. 206
gsoriano@cuadrante.com.mx

Hugo Lozano Cabrera
Cel. 55 2069 6348
Tel. 4444 0555 al 59 ext. 202
hlozano@cuadrante.com.mx